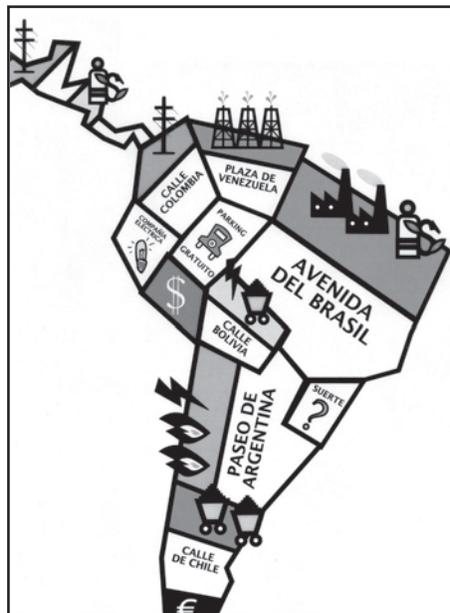


III. EL NUEVO EXTRACTIVISMO PROGRESISTA EN AMERICA DEL SUR

TESIS SOBRE UN VIEJO PROBLEMA BAJO NUEVAS
EXPRESIONES

Eduardo Gudynas*



El llamado extractivismo, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina. A partir de esas actividades se han nutrido las corrientes exportadoras, desempeñaron papeles claves en las economías nacionales, pero también han estado en el centro de fuertes polémicas por sus impactos económicos, sociales y ambientales.

*Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) (2011), Montevideo, Uruguay.

Ilustración de Álvaro Pérez Benavente.

Un hecho notable es que a pesar de todos esos debates, y de la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, el extractivismo goza de buena salud, incluso bajo los gobiernos llamados progresistas o de la nueva izquierda. En efecto, varios de ellos son activos promotores del extractivismo, e incluso lo han acentuado. Pero sus estrategias extractivistas no son idénticas a las del pasado, y por lo tanto es necesario hablar de un «neoextractivismo progresista».

Son prácticas donde el Estado juega papeles más activos, y en varios casos se alimentan programas de lucha contra la pobreza, pero que por otro lado siguen basándose en estilos de alto impacto social y ambiental, que una vez más termina siendo dependiente de los circuitos económicos globales. En el presente capítulo se repasan algunos aspectos claves de este neoextractivismo (basado en textos anteriores del autor, con algunas actualizaciones).

El nuevo contexto político sudamericano

Hasta no hace mucho tiempo atrás, el discurso de la izquierda tradicional siempre cuestionó los estilos de desarrollo convencionales, y con ellos el extractivismo. Se criticaba la dependencia exportadora, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la débil tributación. Esa prédica apuntaba a los sectores extractivos típicos, como la minería y el petróleo. Se reclamaba desandar las reformas neoliberales y romper con esa dependencia. Por lo tanto, desde diversos ámbitos se asumió que una vez que la nueva izquierda lograra ocupar los gobiernos, promoverían cambios sustanciales en los sectores extractivistas.

La nueva izquierda ha logrado conquistar varios gobiernos sudamericanos en los últimos años. Su presencia ha sido clara bajo las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Luis Inacio Lula da Silva en Brasil (y su actual sucesora, Dilma Rousseff), Tabaré Vázquez en Uruguay (y su sucesor, José Mujica), y Hugo Chávez en Venezuela. A esa corriente se la ha sumado el gobierno Michele Bachelet de Chile (que sin embargo fue reemplazado por una administración conservadora), mientras

que Fernando Lugo en Paraguay muestra una vocación progresista pero enfrenta una base partidaria muy débil. De distintas maneras se ha llegado a que al menos ocho países se encontraran bajo la nueva izquierda en los últimos años.

Si bien estos gobiernos son muy distintos entre sí, comparten una crítica al reduccionismo de mercado, que prevaleció en las décadas de 1980 y 1990, despliegan otro activismo estatal, y postulan la lucha contra la pobreza como una de sus tareas prioritarias.

El extractivismo contemporáneo

A pesar del cambio sustancial que representa la llegada del progresismo, y a más allá de las diferencias entre ellos, en todos los países se mantienen las prácticas extractivistas. En efecto, no solo persisten los clásicos emprendimientos, sino que además se ha intentado profundizarlos.

El caso pionero tuvo lugar en Chile, donde a la salida de la dictadura militar, los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia mantuvieron la arquitectura básica del sector minero, alentaron su ampliación a partir de emprendimientos privados, y los intentos de diversificación productiva no han tenido mucho éxito.

Por lo tanto, se presenta como *primera tesis* que a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

En efecto, desde la Venezuela de Hugo Chávez al moderado Lula da Silva en Brasil, persistió la apuesta a sectores como minería y petróleo. El porcentaje de productos primarios sobre las exportaciones totales supera el 90% en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y es más del 80% en Chile y Perú; en el Brasil de Lula creció hasta llegar al 60% (según datos de CEPAL). En este sesgo el papel clave lo juegan la minería, hidrocarburos y monocultivos de exportación.

Podría sostenerse que esto es parte de una «inercia» que proviene de las anteriores administraciones, y que resulta iluso o descabellado postular desandar ese camino. Pero esta posición está reñida con la evidencia disponible, ya que los gobiernos progresistas no solo han mantenido esa tendencia sino que buscan profundizarla en intensidad y ampliarla a nuevos sectores.

En efecto, el extractivismo exportador avanza en todos estos países. Por ejemplo, las exportaciones provenientes de mineras y canteras de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), pasó del orden de los 20.000 millones de dólares en 2004, a un pico de más de 58.000 millones en 2008, y bajar a más de 42.000 millones en 2009 (datos de CEPAL). Argentina es un caso ilustrativo de la profundización del modelo: entre 2003 y 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el número acumulado de proyectos mineros creció por encima del 800%, y las inversiones acumuladas aumentaron un 490%, manteniéndose las ventajas en la inversión y las modestas regalías del 3% (Gutman, 2007). El gobierno de su esposa, Cristina F. de Kirchner sigue la misma tendencia, donde el ejemplo destacado ha sido la aprobación del megaproyecto minero de Pascua Lama compartido con Chile, apuntando a ser el segundo productor de oro continental.

Bajo Lula da Silva, Brasil se está convirtiendo en una potencia minera: se estima que al año 2013 este país duplicará la producción de aluminio, y triplicará la de cobre, poniendo en marcha nuevas minas y procesadoras (USGS, 2008). Al inicio de la administración del Partido de los Trabajadores y sus aliados, en 2003, la producción de cobre fue de 264 millones de toneladas, y creció a 370 millones de toneladas en 2008; (IBRAM, 2009); las exportaciones provenientes de minas y canteras que superaban los 6.000 millones de dólares en 2003, treparon a más de 24.000 millones de dólares en 2009 (según CEPAL).

Entre los ejemplos de expansión a nuevos sectores, los ejemplos más destacados son la promoción de la minería a cielo abierto bajo la administración Correa en Ecuador, el apoyo de una nueva minería del hierro y litio en Bolivia, o el apoyo de la izquierda uruguaya a prospección petrolera en la costa.

También se debe señalar que, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, se ha alentado un cambio sustancial en la agricultura orientándola a monocultivos de exportación. Estas nuevas prácticas representan un extractivismo agrícola. Se la observa especialmente en el cultivo de soja, basado en variedades transgénicas, alto uso de maquinarias, herbicidas químicos, escaso o nulo procesamiento, y exportación como «commodity». Otro tanto sucede con

los monocultivos forestales, que cubren amplias superficies, y están volcados a elaborar pasta de celulosa.

Un extractivismo de nuevo tipo

A pesar de la persistencia del estilo extractivista, no debe asumirse que este es idéntico al que se observaba bajo gobiernos conservadores, ya que tuvieron lugar cambios importantes en la tributación, regalías, etc. Por lo tanto, la *segunda tesis* que se defiende en este análisis es que bajo los gobiernos progresistas se está generando un nuevo estilo de extractivismo.

Este neoextractivismo de cuño progresista tiene sus claroscuros, que van desde una mayor presencia estatal pero a costa de mantener sus impactos sociales y ambientales. Se discuten seguidamente sus características sobresalientes.

Comencemos por recordar que el extractivismo convencional, y en especial aquel de las décadas de 1980 y 1990, se caracterizaba por el acotado papel del Estado, transfiriendo al mercado la marcha de los emprendimientos, y desembocando en una fuerte transnacionalización. En el neoextractivismo, el Estado es mucho más activo, con reglas más claras (independientemente si estas sean buenas o no), y no necesariamente orientado a servir a «amigos» del poder político.

En algunos casos, los nuevos gobiernos renegociaron los contratos, elevaron las regalías y tributos, y potenciaron el papel de sus empresas estatales.

Posiblemente sea en Bolivia donde tuvieron lugar cambios sustanciales, ya que la administración Evo Morales en 2006 impuso la renegociación de contratos con las empresas petroleras, elevó las regalías y tributaciones e intentó potenciar la petrolera estatal YPFB; en Venezuela la administración Chávez ha impuesto propiedad mayoritaria de PDVSA (la petrolera estatal) en los emprendimientos con privados, y mayor vinculación con empresas estatales de otros países.

En Ecuador se sigue la misma línea, y en Brasil se discute una nueva reglamentación para el sector.

Por lo tanto, se presenta como *tercera tesis* un papel más activo del Estado, con intervenciones tanto directas como indirectas, sobre los sectores extractivos.

Inserción internacional, comercio mundial y flujo de capitales

Mientras que el viejo extractivismo apuntaba a las «exportaciones» o el «mercado mundial», los gobiernos progresistas reemplazaron aquel discurso por uno que apunta a la «globalización» y la «competitividad». Al aceptar la dinámica global contemporánea, los gobiernos de izquierda también aceptan sus reglas sobre el comercio, los flujos de capital, la ampliación del concepto de mercadería, o la extensión de los derechos de propiedad. Todo esto desemboca en defender la institucionalidad global, tal como la que descansa en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Esto significa aceptar un papel subordinado en los mercados globales, donde las naciones sudamericanas son tomadoras de precio, dependen fuertemente de los intermediarios y brokers comerciales internacionales, y de los flujos de capital, donde sus decisiones domésticas quedan acotadas a las oportunidades comerciales. A su vez, esto desemboca en una sorda competencia entre los países sudamericanos en atraer inversión extranjera.

Es impactante advertir que en el pasado los gobiernos sudamericanos apoyaban también otras instituciones internacionales que buscaban caminos alternativos para el comercio global.

En especial deben recordarse los esfuerzos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), para promover el comercio Sur-Sur, incluyendo sus experiencias sobre un fondo común sobre commodities, y la creación de los llamados Organismos Internacionales en Bienes Primarios (ICBs - International Commodity Bodies), algunos de los cuales cubrían, por ejemplo, cobre, níquel, plomo y zinc.

Esto deja en claro que los gobiernos progresistas contaban con más de un antecedente de prácticas e institucionalidades alternativas a las cuales apelar.

Estos aspectos permiten presentar como *cuarta tesis* que el neoextractivismo es funcional a la globalización comercial-financiera y mantiene la inserción internacional subordinada de América del Sur.

El flujo de capitales también ha aumentado. Por ejemplo, en Chile las ganancias remesadas al exterior por las empresas extranjeras pasaron de 4.438 millones dólares al inicio del gobierno de R. Lagos, a más de 13.000 millones al finalizar su mandato, y de allí

volvieron a crecer bajo Michele Bachelet a más de 25.000 millones de dólares. En forma análoga, en Brasil, las empresas mineras disfrutaban de exoneraciones tributarias (no pagan el Impuesto Circulación de Mercaderías), y los royalties y valores de la Contribución Financiera por la Exploración Minera que llegan a los municipios son bajos (1 a 3% de la facturación líquida), donde también los cálculos los hacen las propias empresas (Dos Reis Pereira, 2009).

Desterritorialización y fragmentación territorial

El avance de la explotación minera, petrolera o los monocultivos de exportación desencadena profundos impactos territoriales. En muchos casos representan la llegada de contingentes de operarios y técnicos, y sus equipos, a áreas remotas, volviendo a generar economías de enclaves. Esto se enmarca y refuerza un proceso de «desterritorialización», donde el Estado no logra asegurar su presencia en forma adecuada y homogénea en todo su territorio, con limitaciones en la cobertura de los derechos ciudadanos o los servicios públicos, pero a la vez, activo en promover y defender esos enclaves extractivos.

Los enclaves de ese tipo generan las más diversas tensiones territoriales, sociales y ambientales, desde problemas de violencia a los impactos ambientales por contaminación. A su vez, esos emprendimientos requieren redes de comunicación (como el IIRSA) y obras de apoyo (por ejemplo, hidroeléctricas como las del Río Madeira), que desencadenan otros tantos efectos negativos.

Por lo tanto, la *quinta tesis* indica que bajo el nuevo extractivismo persiste la fragmentación territorial en áreas desterritorializadas, generándose un entramado de enclaves y sus conexiones a los mercados globales, que agravan las tensiones territoriales.

La gestión territorial del neoextractivismo está adaptada a estos emprendimientos. Un ejemplo de esto es el paulatino abandono de las metas de reforma agraria bajo la administración Lula da Silva, sustituidos por la regularización de la propiedad de predios por fuera de los dominios de la agroindustria, y avanza únicamente donde puede «ayudar» a los agronegocios (De Oliveira, 2009).

Propiedad y procesos productivos

Frente al viejo extractivismo se disputaba la propiedad de los recursos. Los anteriores gobiernos otorgaban su propiedad, o generaban normas de cesión y acceso a recursos como la minería o el petróleo, que en la práctica resultaban muy similar a ceder la propiedad sobre ellos. Esa tendencia desembocó en una fuerte transnacionalización de los sectores extractivos y un papel cada vez menor de las empresas estatales.

En el neo-extractivismo, como vimos, existe un mayor protagonismo estatal, y por lo tanto se redoblan los controles sobre el acceso a los recursos, en casi todos los casos se insiste en que estos son propiedad del Estado. A su vez, se han resucitado o creado empresas estatales (por ejemplo la potenciación en Bolivia de la YPFB, o la creación de un ente estatal para el gas y energía, ENARSA, en Argentina). Esa presencia es más variada, incluyendo formas estatales, cooperativas, mixtas o privadas.

Pero a pesar de esta situación, sea los estados, como las empresas estatales, se apunta al éxito comercial, y por lo tanto repiten estrategias empresariales basadas en la competitividad, reducción de costos y aumento de la rentabilidad. De esta manera, el desempeño de empresas estatales (como PDVSA de Venezuela), mixtas (como Petrobrás de Brasil) o privadas (como Repsol YPF en Argentina), se asemejan cada vez más a las conocidas prácticas de las viejas empresas transnacionales, como Exxon o British Petroleum.

Por lo tanto, como *sexta tesis* se postula que bajo los gobiernos progresistas cobra una especial importancia reconocer que, más allá de la propiedad de los recursos, se repiten reglas y funcionamientos de los procesos productivos orientados a ganar competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos, incluyendo la externalización de impactos sociales y ambientales. Incluso, allí donde se refuerza la presencia estatal, esta es usada para otorgar contratos de asociación, sociedades o «joint ventures» con empresas privadas (véase, por ejemplo CEDLA, 2009). La performance social y ambiental de las empresas petroleras estatales es pobre y muy discutible, y buenos ejemplos de esto son Petrobrás en países andinos, o la petrolera estatal uruguaya ANCAP.

Las implicaciones de esta cuestión son muy importantes. Entre ellas se destaca que, además del debate sobre la propiedad de los re-

cursos y los medios de producción, se debe promover una discusión mucho más profunda sobre la estructura y dinámica de los procesos productivos, tanto en manos del Estado como en manos de otros actores. Esos procesos productivos determinan los impactos sociales y ambientales, y las relaciones comerciales y económicas.

Impactos socioambientales y conflictos ciudadanos

Los enclaves extractivistas han estado en el centro de muchas polémicas por sus severos impactos sociales y ambientales. Estos van desde acentuar las desigualdades locales a los casos de contaminación o pérdida de biodiversidad. La evidencia empírica que se ha acumulado en los últimos años es variada y contundente, y deja en claro que la situación convencional es aquella donde se externalizan los efectos sociales y ambientales.

Una de las cuestiones más llamativas bajo la nueva izquierda es que no se observan mejoras sustanciales en lidiar con estos impactos, y en especial en el terreno ambiental podría sostenerse que han existido retrocesos en algunos países. Consecuentemente, se plantea como *séptima tesis* que en el neoextractivismo se mantienen, y en algunos casos, se han acentuado los impactos sociales y ambientales, y que las acciones para enfrentarlos y resolverlos todavía son inefectivas, y en ocasiones se han debilitado.

Se han acumulado en los últimos años una larga lista de protestas ciudadanas frente al extractivismo. Una vez más las tensiones más claras se observan en Bolivia, donde en 2010 se volvió a activar una marcha indígena por la dignidad, para enfrentar entre otras cosas los impactos de emprendimientos mineros y petroleros. En Brasil se insiste en «flexibilizar» la regulación y los permisos ambientales, y en Argentina, se vetó una ley de protección de los glaciales andinos para permitir emprendimientos mineros.

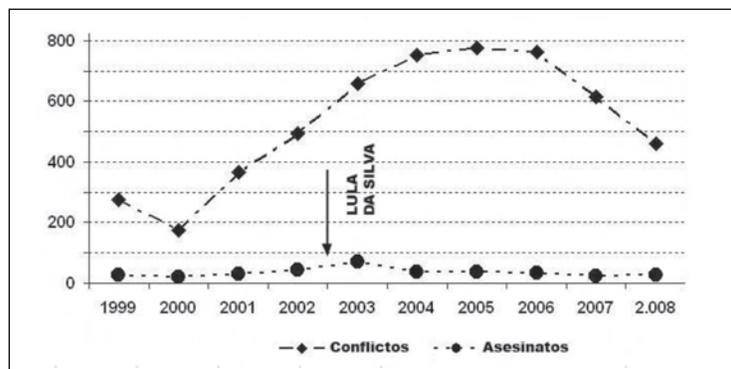
Bajo los gobiernos progresistas el debate sobre los efectos sociales, ambientales y territoriales se vuelve más opaco. En cuanto a la dimensión ambiental, en varias ocasiones se niega su existencia o se los minimiza, y en otros casos se los rechaza, presentándolos como peleas por intereses económicos, confrontaciones sobre el ordenamiento territorial, o expresiones de ocultas agendas político partidarias. Incluso en la Venezuela de Chávez se ha denunciado

que el estado de Zulia se ha convertido en una «zona de sacrificio minero petrolero» (García-Gaudilla, 2009). Algunos gobiernos incluso acusan a indígenas y campesinos de «impedir» el desarrollo (Bebbington, 2009).

Esto explica que las protestas sociales frente al extractivismo se repitan en todos los países bajo gobiernos progresistas. Incluso en países que supuestamente disfrutarían de la tranquilidad de carecer de esos conflictos, un examen atento muestra otro panorama.

Por ejemplo, en Brasil, durante el primer mandato de Lula da Silva los conflictos rurales crecieron sustancialmente, y si bien en el segundo gobierno han caído, siguen estando en altos valores (Fig. 1). Esto se debe a factores como malas condiciones de trabajo, trabajo esclavo y violencia contra los indígenas, todos ellos especialmente en la Amazonia, y muchos vinculados directamente al neoextractivismo.

Figura 1
Ocurrencia de conflictos y asesinatos en el medio rural en Brasil.
 Se indica el inicio de la gestión de Lula da Silva. Elaborado por el autor en base a datos de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil



Excedentes y legitimación política

En el extractivismo clásico, las imposiciones tributarias, regalías o licencias, eran reducidos, y por lo tanto la captación de excedentes desde el Estado era limitada, y se confiaba en un efecto de «goteo».

En el neoextractivismo se observa un cambio sustancial en algunos gobiernos: el Estado es mucho más activo en captar excedentes. Esto se debe a diversos factores, tales como la imposición de regalías muchos más altas en algunos casos, o una mayor tributación, o incluso en forma directa, por medio de una empresa estatal que lleva adelante la explotación.

Este es uno de los aspectos posiblemente más distintivos en el neo-extractivismo, especialmente en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y sus consecuencias van mucho más allá del terreno económico, ya que involucra al menos dos aspectos. Por un lado, refleja un papel activo del Estado, donde los gobiernos tienen más opciones y herramientas para captar parte de la riqueza que generan los sectores extractivos. Por otro lado, los gobiernos progresistas usan esos ingresos de diversas maneras, y entre ellos se destaca el financiamiento de distintos planes sociales, muchos de ellos orientados a los sectores más pobres (como Bolsa Familia en Brasil, Juancito Pinto en Bolivia o el Programa Familias de Argentina; Gudynas y colab., 2008). Esto genera una situación muy particular, ya que se establece un vínculo entre emprendimientos como la minería o hidrocarburos, y el financiamiento de los planes asistenciales gubernamentales. Esa conexión a veces es directa (como con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, en Bolivia), y en otras está mediado por las agencias estatales de asistencia social.

Se observa entonces una relación peculiar, donde el Estado busca captar excedentes provenientes del extractivismo, y al usar parte de estos en esos programas sociales, logra que esa legitimidad social también pueda ser usada para defender actividades extractivas. En otras palabras, si bien esos gobiernos podría decirse que se alejan de la izquierda clásica por su apoyo al extractivismo convencional, regresan a ella y logran justificarse como progresistas por esos programas sociales. Pero esas acciones sociales a su vez necesitan un creciente financiamiento, y por lo tanto esos mismos gobiernos se vuelven dependientes del extractivismo para captar recursos financieros.

Por lo tanto, se plantea como *octava tesis*, que bajo el neo-extractivismo el Estado capta una mayor proporción del excedente, y que una parte de este es destinado a programas sociales que generan una legitimación, tanto para los gobiernos como para los

emprendimientos extractivistas, y que esto contribuye a apaciguar las demandas sociales locales.

Esos programas sociales sirven para pacificar la protesta social. Por ejemplo, en el caso de Brasil, De Oliveira (2009) muestra la paradójica situación donde si bien el gobierno Lula abandonó las metas de reforma agraria y no brinda más tierras a colonizadores y sin-tierra, el número de personas envueltas en esas luchas está en caída. Este «reflujo de los movimientos de masas y el flujo de los recursos financieros gubernamentales canalizados para las políticas compensatorias (paquetes de ayuda de todo tipo y estilo, etc.), están apaciguando a aquellos que lucharon enérgicamente por la reforma agraria en los últimos 30 años. Todo indica que los dos procesos se intercambian» (De Oliveira, 2009).

En este caso, una buena parte de la discusión en lugar de centrarse sobre las prácticas extractivistas, pasa a considerar cómo distribuir los beneficios que provienen de ella. Se cae así en reclamos por porcentajes mayores, o por su destino (si se usarán en construir escuelas, puestos de salud o un nuevo edificio para la alcaldía, por ejemplo). En ese debate a veces intervienen directamente las empresas, sean privadas o estatales, desplazando al propio Estado (donde el ejemplo clásico, son las empresas que aceptan construir escuelas como «compensación» a los grupos locales). De esta manera, las discusiones sobre el extractivismo se distorsionan, y su validez no se cuestiona, desplazados por la consideración de cuestiones instrumentales.

El papel de la redistribución por medio de programas sociales de compensación focalizados es muy importante. Allí donde estos no existen, las protestas sociales frente al extractivismo son mucho más intensas, tal como ocurre en Perú. Bajo los gobiernos progresistas donde esos programas son más efectivos y extendidos, la protesta social disminuye, como sucede en Brasil y Uruguay. Aunque un caso particular se observa en Argentina, donde las administraciones de N. Kirchner y C. F. de Kirchner, ya que sus programas sociales son más efectivos en el medio urbano, que en el espacio rural, donde se observan muchas protestas frente al extractivismo minero y sojero.

De esta manera, las medidas de compensación social que se financian desde el extractivismo generan una legitimidad social a los gobiernos progresistas, y hacen más difícil poder discutir

esos emprendimientos productivos. Aquellos que cuestionan el extractivismo estarían «en contra» del progreso nacional, y hasta podrían poner en cuestión el financiamiento de los planes de asistencia.

Neo-extractivismo, pobreza y desarrollo

Comencemos por recordar que bajo los anteriores contextos políticos, las corrientes progresistas y de izquierda, denunciaban que el extractivismo contribuía a generar la pobreza, las economías de enclave eran vistas como algo negativo, y por lo tanto, se buscaban alternativas de salida a esas condiciones. Bajo los gobiernos progresistas poco a poco se está solidificando un nuevo discurso por el cual el extractivismo ahora pasa a ser una condición necesaria para combatir la pobreza. Hay una reversión de aquella vieja relación, y donde en el pasado había una oposición, en la actualidad es visto como positivo y se convierte en una condición de necesidad para el desarrollo.

Se anuncia que el balance final del extractivismo sería positivo; en algunos casos se llega a admitir que puede tener impactos sociales y ambientales negativos, pero enseguida se replica que estos son manejables o compensables, o que al final de cuentas deben ser aceptados a la luz de un beneficio general para toda la nación. A su vez, los yacimientos mineros y petroleros, o la fertilidad de los suelos, son vistos como riquezas que no pueden ser «desperdiciadas». Aparece un sentido de necesidad y urgencia.

Un buen ejemplo de este tipo de defensa se observa con el presidente Correa en Ecuador. «No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro», afirmó el 15 de enero de 2009. De esta manera, los gobiernos progresistas aceptan el estilo de desarrollo actual como indispensable, aunque mejorable y ajustable, ya que no se pueden desperdiciar esas riquezas. Y dan un paso más: se presentan como que solo ellos pueden llevarlo adelante con eficiencia y con una adecuada redistribución de la riqueza que genera.

Se postula entonces como *novena tesis* que el neo-extractivismo es aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a

escala nacional. Se asume que parte de ese crecimiento generarán beneficios que se derramarán al resto de la sociedad («goteo» o «chorro»). Un Estado, ahora más protagonista, es el que debe alentar, administrar y guiar ese derrame.

Una de las implicaciones de esta postura es que no se cuestiona esta visión reduccionista que iguala crecimiento económico con desarrollo, y por lo tanto no han generado, al menos por ahora, una visión alternativa de desarrollo. Si bien las discusiones bolivianas y ecuatorianas sobre el «buen vivir» tienen ese potencial, los gobiernos y muchos otros actores sociales, parecen derivarla hacia cuestiones instrumentales. En el caso boliviano, la situación es todavía más tensa, debido a que sorpresivamente la nueva Constitución en varios artículos indica que uno de los fines del Estado es la «industrialización» de los recursos naturales.

Este tipo de factores hace que el extractivismo pase a ser entendido como un componente más del estilo de desarrollo propiciado por el progresismo, y que incluso sea visto como necesario y urgente. Muchos de los componentes de las viejas tretas de las empresas mineras y petroleras, que años atrás ofrecían «progreso», «empleo» y «bienestar» para el país y las comunidades locales, reaparece ahora con otros ropajes, otros énfasis, y un mayor papel estatal. Otro ejemplo de Brasil es oportuno: las empresas mineras aprovechan de la «convivencia y sumisión del Estado, de las precarias condiciones en que vive la mayoría de la población de los municipios donde ellas se instalan», y apelan a un discurso sobre la «llegada del desarrollo y el progreso», que gracias al apoyo de políticos locales y regionales, logran condiciones favorables para su implantación y dominio, según los investigadores de la Comisión Pastoral de la Tierra, A. Reis Pereira y colab. (2009).

Estos y otros ejemplos indican que este neo-extractivismo reconfigura los discursos sobre el desarrollo, donde las comunidades locales deben aceptar los sacrificios de los impactos como medio de lograr supuestas metas nacionales, y a cambio de ofrecerles un abanico de medidas de compensación, que pueden ir desde los clásicos programas focalizados de asistencia social, a convertirlos en «socios» de las empresas.

Este abanico de condiciones es tan amplio, que las críticas contra el extractivismo fácilmente pueden ser tildadas de estar en contra

del desarrollo nacional o el progreso, pueden ser calificadas de infantiles o soñadoras, y hasta de peligrosas. Esas expresiones han estado en boca de Correa, Morales y Lula da Silva. Baste como ejemplo, las afirmaciones del pasado julio, del presidente Evo Morales donde critica a grupos indígenas y campesinos que se oponen a petroleras y mineras, donde se pregunta: «¿de qué Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo?» (Econoticias Bolivia, 14 julio 2009).

El neo-extractivismo bajo el mito del progreso

Las diferentes líneas argumentales que provisoriamente se presentan en este ensayo terminan confluyendo en una *décima tesis*: el neoextractivismo es un nuevo ingrediente de una versión contemporánea y sudamericana del desarrollismo. Esta versión es heredera de las ideas clásicas de la Modernidad, y por lo tanto mantiene su fe en el progreso material, pero es un híbrido contemporáneo que resulta de las condiciones culturales y políticas propias de América del Sur.

En efecto, la idea del progreso continuado, basado en la técnica, y nutrido de las riquezas de la naturaleza, ha sido una expresión clásica de la Modernidad europea. La nueva izquierda latinoamericana es heredera de esas ideas, pero las ha reconfigurado debido a variados factores, que van desde los antecedentes de sus propias luchas políticas, los efectos de la caída de los socialismos reales, las demandas de sectores populares y pueblos indígenas, y hasta los efectos de las reformas neoliberales. Es el resultado de una nueva mezcla, donde hay tanto viejos como nuevos ingredientes. Esto explica que el viejo y el nuevo extractivismo comparten algunos aspectos en común, pero los énfasis son distintos, y cada uno posee algunos atributos propios. Eso a su vez explica algunas coincidencias en cuanto al extractivismo entre gobiernos tan dispares como los de Rafael Correa en Ecuador o Alan García en Perú.

La izquierda sudamericana no reniega del clásico apego al crecimiento económico basado en la apropiación de los recursos naturales. El extractivismo juega un papel importante en este nuevo programa, ya que no se lo rechaza, sino que se lo debería profundizar debido a que sería uno de los motores para asegurar el creci-

miento económico y el propio mantenimiento financiero del Estado, aunque debe ser manejado. Mientras que el viejo extractivismo debía lidiar con los desbalances en los términos de intercambio, el neo-extractivismo cree que los altos precios internacionales son una oportunidad que no se pueden desaprovechar.

Pero a su vez, como este nuevo extractivismo contribuye a financiar los programas sociales que son clave para que estos nuevos gobiernos se puedan definir como progresistas, logrando una legitimidad política inesperada. La crítica al neo-extractivismo implicaría un cuestionamiento a la vieja idea del progreso, pero también a uno de los pilares de los programas sociales, y por lo tanto a una de las justificaciones de llamarse progresista. Ello explica que los cuestionamientos de indígenas o ambientalistas sean rechazados o ignorados desde estos nuevos gobiernos.

Este progresismo representaría un «nacionalismo sobre los recursos», siguiendo las palabras de Bebbington (2009), donde no se cuestiona la extracción en sí misma sino su control privado y extranjero. Esos gobiernos se mueven a tomar un control estatal sobre esos recursos, aunque con ellos terminen reproduciendo los mismos procesos productivos, similares relaciones de poder y los mismos impactos sociales y ambientales.

Conclusiones preliminares

A lo largo del presente ensayo se ofrecen una serie de ideas y argumentos sobre la permanencia del extractivismo en América del Sur. La idea central es que este no es igual al que tenía lugar en anteriores décadas, y en el caso de los gobiernos progresistas se ha generado un extractivismo de nuevo cuño. En su caracterización se observan tanto viejos como nuevos componentes, pero además este conjunto es singular, con sesgos propios, como el papel otorgado al Estado y las nuevas fuentes de legitimación social y política.

El reconocimiento de la identidad propia de este estilo progresista de extractivismo requiere un abordaje con rigurosidad y medida. Es importante comprender que el neoextractivismo no puede ser entendido como una estrategia neoliberal, similar a las observadas en las décadas anteriores, pero tampoco puede ser interpretado

como una promisorio alternativa, que mecánicamente mejora la calidad de vida y la autonomía ciudadana. Es evidente que el actual progresismo ofrece en muchos casos mejoras sustanciales frente a los regímenes conservadores.

Pero como queda claro que persisten limitaciones, resistencias y contradicciones, y por lo tanto no se puede analizar la actual izquierda sudamericana bajo los viejos paradigmas.

Ignorar los impactos del neoextractivismo, o callar los análisis por simpatías partidarias, es un camino desatinado, y en especial en los ámbitos académicos o en la militancia social.

Aprovechar esos claroscuros para rechazar insidiosamente todas las acciones de la izquierda gobernante, es otro sendero equivocado.

Es cierto que bajo el neoextractivismo permanecen muchos impactos, especialmente en aspectos sociales y ambientales. Pero a pesar de esto, no puede sostenerse que este represente en realidad un neoliberalismo o un «capitalismo salvaje», como por ejemplo sostiene García-Guadilla (2009) para el chavismo en Venezuela.

Sin duda, las tesis presentadas a lo largo del texto, son elaboraciones preliminares y requieren de un trabajo más exhaustivo. Es imprescindible seguir profundizando en la caracterización de los nuevos estilos de desarrollo del progresismo sudamericano, ya que desde allí se originan las actuales tensiones sociales y los impactos ambientales, y por lo tanto una mejor comprensión es imprescindible para ofrecer alternativas. La tarea es también urgente, para comprender las nuevas demandas y posibilidades de la sociedad civil frente a los desafíos del desarrollo.

Referencias bibliográficas

- BEBBINGTON, A. y HINOJOSA VALENCIA, L. (2007), «Conclusiones: minería, neoliberalismos y reterritorialización en el desarrollo rural», en *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas*, A. Bebbington, IEP y CEPES, Lima, pp. 282-313.
- BEBBINGTON, A. (2009), «The new extraction: rewriting the political ecology of the Andes?» 42(5): 12-20, *NACLA Report on the Americas*.

- CEDLA (2009), *La industrialización no es el norte de la política del MAS*, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.
- (2010), *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, CEPAL, Santiago de Chile.
- DE OLIVEIRA, A.U. (2009), *O governo Lula assumiu a contra reforma agrária: a violência do agrobandidismo continua*, Comissão Pastoral da Terra, Secretaria Nacional (www.cptnac.com.br)
- DOS REIS PEREIRA, A.; GONÇALVES AFONSO, J.B. y GOMES CRUZ NETO, R. (s.d.), *A exploração minerária e suas conseqüências na Amazônia brasileira. Conflitos no Campo Brasil*, Comissão Pastoral da Terra, Secretaria Nacional.
- GARCÍA-GAUDILLA, M.P. (2009), «Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa en Venezuela», *Revista Venezolana Economía y Ciencias Sociales*, 15(1): 187-223.
- GUDYNAS, E. (2005), «Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas», *Revista del Sur*, 160: 3-13, Montevideo.
- GUTMAN, N. (2007), «La conquista del Lejano Oeste», *Le Monde Diplomatique*, 8(95): 12-14, Buenos Aires.
- IBRAM (2009), *Informações e análises da economia mineral brasileira*, IBRAM, Brasília.
- MORALES, C.B. de y RIBERA ARISMENDI, M.O. (eds.) (2008), *Informe del estado ambiental de Bolivia, 2007-2008*, LIDEMA, La Paz.
- PNUD (2008), *Informe de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*, Nueva York.
- USGS (2008-2006), *Minerals Yearbook. Latin America and Canada*, US Geological Service, US Department of the Interior.